

# CRONICA DEL MES

Agosto-septiembre

La nueva coyuntura regional abierta por la cumbre de mandatarios centroamericanos realizada en Guatemala los días 6 y 7 de agosto y, en particular, los acuerdos específicos contenidos en el documento suscrito por los presidentes al término del encuentro, desataron en El Salvador dinanismos de diálogo que no pocos sectores interpretaron como capaces de desempañar el proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR.

Incluso el FMLN-FDR, que en las semanas precedentes había recibido con ciertas cautelas el plan de paz del presidente Arias, cuyas líneas fundamentales recogió el documento de Esquipulas II, interpretó la cumbre en términos más bien optimistas, sin abandonar, por ello, las críticas sobre aquellos puntos del documento en que la injerencia norteamericana no quedaba explícitamente repudiada o en que los mandatarios no habían precisado suficientemente las características peculiares de los procesos internos de los países del área. Así, el 9 de agosto, en una primera reacción a la cumbre, el presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR), Dr. Guillermo Ungo, manifestó que los acuerdos suscritos por los mandatarios le parecían "positivos" tomando en cuenta el relativo margen de autonomía mostrado respecto de las presiones del gobierno de Reagan, aun cuando, por otro lado, el documento adolecía de ciertas deficiencias, como lo era la marginación de los grupos armados, especialmente en el caso salvadoreño, sin percatarse de que sin ellos no existiría paz en Centroamérica.

De modo más oficial, la comandancia general del FMLN emitió el 12 de agosto un comunicado de 12 puntos expresando su posición sobre la cumbre. En lo fundamental, el FMLN interpretaba los acuerdos como "lógico resultado del profundo debilitamiento sufrido por la política Reagan en Centroamérica," al tiempo que aseguraba que Duarte no los había suscrito porque estuviese convencido de

su razonabilidad, sino que se había visto forzado a firmar "por la profunda debilidad política y militar de su gobierno, encontrándose el país inmerso en la crisis económica, política y social más grande de la historia nacional." En conjunto, pese a la ausencia de una condena explícita de la injerencia norteamericana en el istmo, el FMLN consideraba que el documento "establece un marco general favorable para la continuidad del diálogo en nuestro país." A este respecto, y en términos más operativos, la comandancia general manifestaba su disposición a celebrar de inmediato reuniones de diálogos con el gobierno salvadoreño "ya sea en el interior o exterior del país, en público o en privado, con agenda que incluya temas como cese de fuego, negociación global y, por lo menos, los 18 puntos para la humanización y reducción del impacto económico, político y social de la guerra, que propusimos a fines de mayo y a lo cual aún no tenemos respuesta."

Por su lado, en un aparente intento por arrebatar las banderas del diálogo interno al FMLN-FDR, el presidente Duarte asumió como si fueran propias las disposiciones de Esquipulas II, cursando invitaciones a la conferencia episcopal (CEDES) y a los partidos políticos para que designaran sendas ternas de candidatos de entre los cuales el ejecutivo elegiría a los representantes, propietario y suplente, de los obispos y de los partidos ante la Comisión Nacional de Reconciliación. Todavía más, el 13, al exponer ante la asamblea legislativa el contenido de Esquipulas II, Duarte exhortó al FMLN-FDR y a la Resistencia Nicaragüense a que manifestaran, antes del 30 de agosto, su aceptación expresa y pública de Esquipulas II, proponiendo al mismo tiempo, en caso de que ambas fuerzas respondiesen afirmativamente, que el 15 de septiembre se realizara un diálogo simultáneo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN-FDR, por un lado, y el gobierno nicaragüense y la resistencia armada antisandinista,

por otro, para discutir la implementación del cese de fuego. A su vez, al día siguiente, aunque sin pronunciarse pública y expresamente a favor de Esquipulas II, el FMLN-FDR aceptó la propuesta de reunirse el 15 de septiembre, sugiriendo adicionalmente que el encuentro se efectuara en la sede de la Nunciatura Apostólica en San Salvador y que se prolongara hasta el 16. Hacia las mismas fechas, una misión gubernamental del alto nivel, integrada por el Vicepresidente Rodolfo Castillo Claramount, y los ministros de planificación y de cultura, Fidel Chávez Mena y Julio Adolfo Rey Prendes, respectivamente, partió a Estados Unidos, para explicar al gobierno de Reagan lo actuado por el gobierno salvadoreño en la cumbre de Guatemala.

Con todo, la orientación misma de la convocatoria y la integración de la Comisión Nacional de Reconciliación pronto empezaron a revelar severas ambigüedades. La convocatoria excluyó al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y a la Unión Democrática Nacionalista (UDN), exclusión que el presidente del Consejo Central de Elecciones, Dr. Mario Samayoa (PDC) justificó arguyendo que ni el MNR ni la UDN tenían actualizada la nómina de sus directivos ni del representante legal. En la terna elegida por los obispos quedaron monseñor Revelo, monseñor Gregorio Rosa Chávez y monseñor Rivera. Como ciudadano notable, el presidente Duarte eligió al expresidente Alvaro Magaña y como representante propietario por parte del ejecutivo, al vicepresidente Castillo Claramount. Los partidos políticos, en cambio, tardaron bastante más en elegir su terna. Después de varias reuniones, el 28 de agosto, convinieron en designar al presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, al coronel Roberto Escobar García (PAISA) y al Dr. Mario Reni Rolán, secretario general del Partido Social Demócrata (PSD). El día anterior, en la asamblea legislativa, los partidos habían discutido acaloradamente si lo que procedía jurídicamente respecto de los acuerdos de Esquipulas II era su ratificación formal o simplemente la concesión de un "respaldo político." Finalmente, se impuso esta última alternativa, por 39 votos del PDC y PCN, ante la oposición de ARENA, PAISA y del diputado independiente René Fortín Magaña.

Mientras, el presidente Duarte siguió trabajando para sacar adelante su sugerencia de reunirse con el FMLN-FDR el 15 de septiembre, previa aceptación pública por parte de ésta de los acuerdos de Esquipulas II. Como una medida de presión, el 21 de agosto, los líderes de la Resistencia Nicaragüense se reunieron con Duarte, tras lo cual manifestaron su adhesión al planteamiento de Esquipulas II y su disposición a reunirse con el gobierno nicaragüense en la fecha propuesta por el mandatario salvadoreño. El FMLN-FDR, empero, continuó evadiendo cualquier compromiso formal con Esquipulas II,

considerando que la condición impuesta por Duarte para reunirse el 15 de septiembre constituía una trampa para deslegitimar a la insurgencia salvadoreña. Con todo, ello no impidió a los frentes reiterar su apoyo parcial al grueso de los contenidos de Esquipulas II. El 18 de agosto, en una carta enviada a los presidentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como a los de los países de los grupos de Contadora y de Apoyo, el FMLN-FDR reiteró que el Procedimiento firmado en Guatemala "genera futuras posibilidades para construir una paz duradera." Al mismo tiempo, los frentes demandaban de los mandatarios que incrementaran sus gestiones ante el gobierno salvadoreño para reanudar el diálogo "sin condiciones previas."

En un nuevo comunicado, emitido el 27 de agosto, el FMLN-FDR reiteró una vez más que Esquipulas II establecía "un marco general favorable para la búsqueda de soluciones políticas de los conflictos internos de cada país centroamericano," pero seguía evadiendo comprometerse con una aceptación formal del documento, aduciendo que ésta era "un compromiso de carácter genérico adquirido exclusivamente por los gobiernos," al cual, por tanto, el FMLN-FDR no estaba obligado por no haber sido suscriptor de los acuerdos. Asimismo, los frentes rechazaron categóricamente la pretensión de establecer cualquier parangón entre su lucha y el carácter mercenario de los contras, subrayando que la implementación de Esquipulas II implicaba "reconocer las particularidades de los procesos de cada país y concertar compromisos con las fuerzas protagonistas de esos procesos, abandonando la pretensión de establecer simetrías realmente inexistentes entre los conflictos de cada país." Al propio tiempo, el FMLN-FDR empezó a realizar gestiones ante el Estado del Vaticano para obtener la autorización necesaria para usar su embajada en San Salvador como sede del eventual encuentro, y solicitó realizar con monseñor Rivera una reunión en Guatemala o Panamá, para ir adelantando preparativos. Adicionalmente, en el supuesto de que la reunión de diálogo se realizara el 15 de septiembre, el FMLN anunció su disposición a un cese de fuego temporal del 12 al 17 de dicho mes en todo el territorio nacional.

No obstante todas estas muestras de flexibilidad y de disposición al diálogo, el presidente Duarte consideró que, no habiendo recibido del FMLN-FDR la aceptación expresa y pública de Esquipulas II, y vencido el plazo el 30 de agosto, ya no sería posible reunirse el 15 de septiembre, aun cuando no descartó que pudiese realizarse otro encuentro de diálogo en otra fecha.

La creciente discusión interna en torno a Esquipulas II opacó relativamente los dinamismos de otras vertientes del proceso político nacional. En particular, el gobierno, bajo la pantalla ideológica

de su aparente preocupación por implementar Esquipulas II, aumentó sus presiones, tanto "legales" como abiertamente represivas, sobre el movimiento laboral. El blanco principal de ellas fue, como era previsible, la huelga del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS), la cual entró a su tercer mes de duración.

El 4 de agosto, efectivos del ejército y de la Policía Nacional ocuparon las instalaciones del hospital del ISSS en Santa Ana, capturando a 5 sindicalistas, quienes fueron entregados posteriormente a la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos. A la ocupación del hospital de Santa Ana siguió, en los días subsiguientes, la ocupación de otras unidades del ISSS en diversos puntos del país. El 10, el STISSS denunció que esa fecha habían sido militarizadas las oficinas administrativas del Seguro Social en San Salvador, así como la regional de Sonsonate y las unidades médicas de Usulután, Metapán y Chalchuapa (Santa Ana), Acajutla (Sonsonate) y Zacamil (San Salvador). El 13, efectivos antimotines de la Policía Nacional ocuparon simultáneamente las unidades médicas de Santa Anita, Atlacatl y el hospital general del ISSS, todos en San Salvador. El mismo día, un contingente de soldados de la Tercera Brigada de Infantería ocupó las instalaciones del ISSS en San Miguel. En todos los casos, la directiva del ISSS rechazó que se tratara de una militarización "porque no se ha sustituido el personal médico y paramédico por personal militar, sino que se protege a los trabajadores que quieren laborar y a los asegurados que necesitan el servicio." Por su lado, en una nueva iniciativa para flexibilizar su posición, el STISSS propuso, el 15, levantar inmediatamente la huelga a cambio de que el gobierno reincorporara a todos los trabajadores despedidos, retirara las sanciones legales y el juicio entablado contra el sindicato y reiniciara inmediatamente el proceso de negociaciones. Dos días después, empero, ante la intransigencia de la dirección del ISSS, el STISSS llamó a sus bases a no presentarse a trabajar a las unidades militarizadas y a concentrarse en la unidad "Primero de Mayo," donde permanecía la junta directiva del sindicato.

Paralelamente, una nueva ola de represión selectiva se desató sobre el movimiento laboral. El 10 de agosto, la Policía Nacional capturó a 2 sindicalistas de ANTMAG, cuyo conflicto recién había concluido a finales del mes anterior. Tres días más tarde, un grupo de desconocidos fuertemente armados allanó la sede de la UNTS, cuyos archivos y escritorios registró minuciosamente. El 12, los sindicatos de ANDA, ANTEL y del Banco Salvadoreño solicitaron nuevamente audiencia al presidente Duarte, para presentarle su pliego común de demandas, al tiempo que denunciaron la militarización de las tres entidades, así como despidos injustificados, traslados arbitrarios y otras violaciones a sus derechos la-

borales. Por su lado, aprovechando la coyuntura abierta por Esquipulas II, diversas organizaciones (ANDES, ANTMAG, COACES, FENACOA, SICAFE, SITAS, CODIDES, etc.) incrementaron sus presiones para que el gobierno cumpliera con los compromisos de pacificación suscritos en Guatemala.

El 18 de agosto se encontró el cadáver de José Raúl Henríquez, dirigente de ANTA, quien había sido capturado el 29 de junio por la defensa civil de Tonacatepeque. El mismo día, FESTIAVTSCES denunció la captura de su secretario de asuntos juveniles, Romel Antonio Argueta, efectuada el día anterior en San Martín por agentes de la Guardia Nacional. Tres días después, dicho cuerpo de seguridad consignó al sindicalista al Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque, bajo la acusación de pertenecer al Partido Comunista. El 22, fue capturado el segundo secretario de conflictos del sindicato de la Fábrica de Aceites y Grasas "El Dorado," Fermín Antonio Rauda. Cinco días después, estando ya en Mariona, Rauda fue herido en el curso de una serie de disparos que vigilantes del penal dirigieron contra José Vladimir Centeno (acusado de haber participado en el secuestro del coronel Avalos, ocurrido en octubre de 1985). El 29 de agosto, el Juzgado Sexto de lo Penal emitió orden de captura contra los directivos sindicales, a quienes el director del ISSS, Jorge Bustamente, había acusado formalmente el 14 de julio, en ese mismo juzgado, del delito de "abuso contra el libre ejercicio del derecho a huelga y contra el derecho a trabajar," que el artículo 226 del Código Penal sanciona con "30 a 500 días multa." Al mismo tiempo, el ISSS ratificó el despido de 99 huelguistas.

A la sombra de las discusiones en torno a Esquipulas II, por un lado, y de la conflictividad laboral, por otro, la guerra prosiguió su desarrollo aunque a un ritmo relativamente menos intenso. A la racha de voladura de puentes, iniciada a mediados de julio, se sumó, en los primeros días de agosto la demolición de los puentes de El Granal (Chalatenango) y Titihuapa (San Vicente-Cabañas) y, pocos días después, el 11 de agosto, el del puente Vado Marín, sobre el río Grande de San Miguel. También la infraestructura ferroviaria siguió siendo blanco del sabotaje. El 12, unidades insurgentes destruyeron parcialmente, en Usulután, un tren de FENADESAL. Posteriormente, el 20, otras unidades dinamitaron un carro motor de FENADESAL que se conducía entre San Rafael Cedros y Molineros, Verapaz (San Vicente), a la altura del puente Talpetates, en jurisdicción de Santo Domingo. Otra máquina de FENADESAL fue saboteada el 26, sobre la línea férrea entre Nejapa y Quezaltepeque.

Concomitantemente, el FMLN prosiguió su tarea de desgaste de la Fuerza Armada a través de diver-

sas emboscadas y ataques medianos a posiciones fijas. Los principales enfrentamientos en esta línea se suscitaron en Tierra Blanca (Usulután), San Nicolás Lempa, Guadalupe y Apastepeque (San Vicente), La Herradura (La Paz), San Fernando (Chalatenango), Jocoatique y Oscicala (Morazán) y Chapeitique (San Miguel). La actividad rebelde se desplegó también, incluso de forma incrementada, en San Salvador. El 13, 3 agentes de la Guardia Nacional, vestidos de civil, murieron ametrallados en las afueras de la Universidad Nacional. El mismo día, 3 efectivos de la Policía de Hacienda, también de civil, quienes patrullaban en las inmediaciones de la Alameda Juan Pablo II, fueron atacados con armas de grueso calibre. Uno de ellos murió y los otros dos quedaron heridos. Al día siguiente, en un atentado que algunos sectores estimaron como medida de represalia, fue asesinado por desconocidos fuertemente armados, a la entrada de la Universidad Nacional, el catedrático de dicho centro, José Menjívar Flores.

La principal acción guerrillera del mes, sin embargo, se realizó el 29, el ataque a Jucuarán (Usulután). En la operación, según Radio Venceremos, el FMLN habría ocasionado 20 muertos y 35 heridos al batallón Oromontique, además de destruir parcialmente las instalaciones militares y los puestos de defensa, y de recuperar 19 fusiles M-16, 5 ametralladoras M-60, 2 lanzagranadas M-72, 1 M-79, 35 granadas para M-79, 3 mil cartuchos 7.76 y diverso material bélico. En relación al mismo suceso, el ejército admitió que en sus filas habían muerto 15 efectivos y 18 habían sido heridos.

En el balance mensual sobre la actividad de agosto, Radio Venceremos aseguró que el FMLN había causado al ejército 615 bajas entre muertos y heridos y destruido 11 camiones militares. Por su parte, el COPREFA informó que, durante el mismo período, la Fuerza Armada causó a la guerrilla 123 bajas, entre ellas 77 muertos, 41 heridos y 2 capturados, además de 3 guerrilleros que habrían desertado. En relación a la actividad de sabotaje, acusó al FMLN de haber destruido 2 puentes, 2 oficinas de telecomunicaciones, 2 alcaldías y 2 máquinas de FENADESAL.

En el plano regional, como en el nacional, los acontecimientos del mes estuvieron dominados por los dinamismos desatados por la cumbre de Esquipulas II, cuya sola realización, superando toda una serie de circunstancias adversas, bastó para suscitar insospechadas perspectivas de que la pacificación en Centroamérica no era, después de todo, una tarea tan irrealizable como las presiones del gobierno de Reagan habían hecho suponer.

La cumbre estuvo antecedida inmediatamente de una primera reunión preparatoria de los cancilleres centroamericanos, en la cual participaron también

los cancilleres del Grupo de Contadora. La reunión se celebró en Tegucigalpa, los días 31 de julio y 1 de agosto, y tenía el propósito de elaborar un documento que sirviera de base de discusión a los mandatarios. Una segunda reunión preparatoria se realizó en Guatemala, esta vez sin la presencia de Contadora, los días 4 y 5 de agosto. En ella se prosiguió con la elaboración del documento-base que, pese a las presiones norteamericanas, recogía en sus líneas fundamentales el contenido del plan de paz del presidente Arias.

El 3, en vísperas de realizarse la segunda reunión preparatoria de los cancilleres, el presidente Reagan presentó al congreso norteamericano un presunto plan de paz para Centroamérica, orientado más bien a presionar a Nicaragua que a propiciar la pacificación en el área. Formalmente, el plan contemplaba un cese del fuego en el territorio nicaragüense y la retirada de Nicaragua de los asesores militares extranjeros, así como un plan de "reconciliación nacional" y una amnistía para los excombatientes contrarrevolucionarios. A cambio de ello, Estados Unidos se comprometía a dismantlar los campamentos de éstos y cesar las presiones de todo tipo sobre Nicaragua. En el fondo, la propuesta constituía un ultimátum al cual el gobierno nicaragüense debía responder antes del 30 de agosto o, de lo contrario, el gobierno de Reagan proseguiría con sus planes de ayuda a los contras.

En este marco los mandatarios centroamericanos iniciaron sus deliberaciones el 6, también en la ciudad de Guatemala. Según versiones difundidas por la prensa, a partir de las discusiones que lograron trascender el recinto de los presidentes, tanto José Azcona Hoyo como Napoleón Duarte eran partidarios de que en la agenda de discusiones se incluyese el intempestivo plan propuesto por Reagan, moción a la cual se opusieron firmemente los presidentes Vinicio Cerezo y Oscar Arias, recordando que se trataba de una reunión para discutir los intereses centroamericanos entre los protagonistas que sufrían directamente los efectos del conflicto centroamericano. Por su parte, el presidente Daniel Ortega, cazarmente, manifestó que no tenía ningún reparo en discutir la propuesta norteamericana, pero en una negociación directa con la Casa Blanca.

Tanto la habilidad del presidente Cerezo como, sobre todo, la de Arias, lograron sortear las presiones norteamericanas para erradicar del plan costarricense aquellos puntos que arriesgaban su escalada intervencionista en la región. El 7, al término del encuentro, los mandatarios suscribieron el "Procedimiento para establecer al paz firme y duradera en Centroamérica," el cual reproducía en sus líneas básicas e incluso en los detalles el Plan Arias. Como fruto colateral del encuentro, el presidente Ortega prometió a Arias que Nicaragua retiraría de la Corte

Internacional de La Haya la demanda presentada el 28 de julio de 1986 contra Costa Rica, en la cual acusó a este país de complicidad con las actividades de la contrarrevolución. El 12 de agosto, el gobierno nicaragüense hizo efectivo el retiro de la demanda, no sin antes reiterar, mediante pruebas documentales, el papel que había estado jugando Costa Rica como plataforma de los contras.

Como era previsible, la reacción del gobierno de Reagan a los acuerdos suscritos por los mandatarios no fue muy entusiasta. El presidente Reagan trató de guardar las apariencias protocolares -después de todo, el documento había sido suscrito también por sus aliados más incondicionales en el área: Honduras y El Salvador- y felicitó a los presidentes, aun cuando, veladamente, advirtió que su respaldo a Esquipulas II se daría "en consonancia con los intereses de la democracia y de quienes luchan por la libertad." Menos preocupado por el protocolo diplomático, el vocero del Departamento de Estado, Charles Redman, puntualizó que "todo acuerdo de paz en Centroamérica debe tener en cuenta nuestros intereses de seguridad en la región y nuestro compromiso con los rebeldes antisandinistas." El propio secretario de defensa, Caspar Weinberger, manifestó que "todo el mundo reconoce que hay problemas con ese plan...no me parece que esté en forma tal que pudiéramos apoyarlo resueltamente." En el extremo derecho de las reacciones, el *Wall Street Journal* calificó la cumbre como un "fiasco" y lamentó que "después de 6 años y medio en el poder, el presidente de Estados Unidos ha entregado su política exterior en el hemisferio meridional a cuatro atemorizados presidentes."

En el mismo contexto, el enviado especial de la Casa Blanca para Centroamérica, Philip Habib, anunció, el 14, su renuncia a dicho cargo, debido a aparentes desacuerdos con la línea más beligerante que el Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Elliott Abrams, quería imprimir a la política exterior hacia Centroamérica. El 17 de agosto, los representantes diplomáticos norteamericanos en el área se reunieron en Washington con funcionarios de los departamentos de Estado y del pentágono, así como de la Casa Blanca, para analizar la estrategia a seguir en la coyuntura abierta por Esquipulas II. Días más tarde, el 27 de agosto, Reagan se entrevistó, por segunda vez en menos de 3 semanas, con los líderes de la Resistencia Nicaragüense, para coordinar la continuación de la ayuda a los contras en las nuevas circunstancias.

Mientras, los suscriptores de Esquipulas II emprendieron, en la medida de sus posibilidades reales y de sus verdaderas intenciones, la implementación de los acuerdos contenidos en el documento. Según lo estipulado en el punto 11, relativo al calendario de ejecución de compromisos, los 5 cancilleres

centroamericanos se reunieron el 19 y 20 de agosto en San Salvador, para instalar la comisión ejecutiva encargada de "reglamentar, impulsar y viabilizar el cumplimiento de los acuerdos." Pocos días después, el 22 y 23, se realizó en Caracas un nuevo encuentro de cancilleres, esta vez con la participación de los grupos de Contadora y de Apoyo, así como del secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, y de Alvaro de Soto, enviado especial del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Como resultado del encuentro, quedó constituida la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, contemplada en el punto 10 de los acuerdos.

Entre todos los protagonistas del conflicto centroamericano, Nicaragua tomó pronto la delantera en la implementación de Esquipulas II. El 25 de agosto, el presidente Daniel Ortega anunció la integración de la Comisión Nacional de Reconciliación, designando presidente de la misma al representante de los obispos, el cardenal Obando. Asimismo, anunció que el obispo Pablo Antonio Vega, y los padres Bismarck Carballo y Benito Pitito, expulsados por apoyar a la contrarrevolución, podían retornar al país gozando de todas las garantías.

Tanto el panorama nacional como el regional estuvieron nuevamente dominados por los dinamismos de Esquipulas II durante el mes de septiembre, aun cuando el optimismo inicial que suscitaron los acuerdos empezó a ser templado por las dificultades reales que se alzaban para implementarlos efectivamente.

En El Salvador, bajo la cobertura del nuevo clima de pacificación regional y, sobre todo, por influjo de las gestiones desplegadas personalmente por el presidente Arias ante el presidente Duarte, el proceso de diálogo interno empezó a reanudar lentamente la marcha.

El 7 de septiembre, el presidente Duarte juramentó a la Comisión Nacional de Reconciliación, la cual quedó integrada por monseñor Marco René Revelo y monseñor Gregorio Rosa Chávez, como representantes propietario y suplente de la CEDES; por Alfredo Cristiani (ARENA) y el Dr. Mario Reni Roldán (PSD) como representantes propietario y suplente de los partidos políticos; por el vicepresidente Rodolfo Castillo Claramount y el Dr. Ricardo González Camacho como representantes propietario y suplente por parte del gobierno; y por el Dr. Alvaro Magaña y el Dr. Guillermo Trabaino como ciudadanos notables propietario y suplente. Durante el mismo acto, Duarte juramentó también a las comisiones de diálogo interno, amnistía, parlamento centroamericano y de desplazados y refugiados, las cuales no estaban contempladas formalmente en el documento de Esquipulas II, pero él las justificó aduciendo que constituirían mecanis-

mos para agilizar su implementación. Asimismo, dio a conocer la conformación de una "Comisión Ejecutiva Nacional," integrada por los presidentes de los tres órganos del Estado, el Alto Mando de la Fuerza Armada y "otros sectores de la vida nacional," y coordinada por el vicepresidente Castillo Claramount.

Mientras tanto, el FMLN-FDR hizo diversas gestiones ante los presidentes Oscar Arias y Eric Arturo del Valle, para que intercedieran ante Duarte en orden a reanudar el diálogo. El 7 de septiembre, los delegados revolucionarios se entrevistaron en San José con Arias y, al día siguiente, en Panamá, con Arturo del Valle. Posteriormente, el 14, tuvieron una segunda entrevista con Arias. Las dos entrevistas con éste tuvieron particular relevancia.

A la primera, el 7, acudieron los doctores Guillermo Ungo y Rubén Zamora, así como los comandantes Shafick Handal y Mario López. Por parte del gobierno costarricense estuvieron presentes, además del propio Oscar Arias, su hermano Rodrigo Arias, y el canciller Rodrigo Madrigal Nieto. Según el mismo Arias, la reunión, que se prolongó por dos horas y media, transcurrió en una atmósfera "amistosa y franca." Al término de ella, el mandatario reiteró que "Costa Rica no escatima esfuerzos para el logro de la paz en Centroamérica y el cese de fuego es uno de los puntos prioritarios a resolver para pacificar la región." Por su parte, Shafick Handal le manifestó que aunque los frentes no estaban dispuestos a un cese de fuego incondicional como el demandado por Duarte, sí estaban "en la mejor disposición de llegar a una solución de la problemática salvadoreña e incluso de ir a un cese de fuego temporal unilateral." Asimismo, Arias aseguró que podía contar con "toda la flexibilidad" del FMLN-FDR para gestionar ante Duarte la reanudación del diálogo en El Salvador. Sobre la base de ese primer encuentro y de los intercambios telefónicos sostenidos por Arias con Duarte y Ungo durante la semana subsiguiente, el mandatario costarricense se reunió una segunda vez con el FMLN-FDR, el 14 de septiembre. En el curso de esta segunda cita, Arias transmitió telefónicamente a Duarte las apreciaciones de los frentes y comunicó a los delegados revolucionarios, a su vez, las respuestas de Duarte. Al término de la entrevista, que duró más de 4 horas, Arias manifestó que "estamos avanzando hacia el logro del diálogo," si bien no dio a conocer acuerdos concretos.

Paulatinamente, todo ello fue generando en El Salvador una atmósfera más favorable al diálogo, incluso de parte de las fuerzas de la derecha que lo habían venido adversando de modo apriorístico y visceral. El propio partido ARENA presentó, el 10, a la asamblea legislativa y proyecto de "Ley transitoria de amnistía" a efecto de que los "jefes" o

"representantes" de la guerrilla pudieran gozar de una amnistía de 72 horas para poder ingresar al país y reunirse con Duarte el 15 de septiembre sin lesionar la constitucionalidad de la nación. Como "jefes" o representantes" de la insurgencia, el proyecto reconocía a Guillermo Ungo, Rubén Zamora, Salvador Samayoa, Shafick Handal, Joaquín Villalobos, Dagoberto Gutiérrez y Mario López. Con todo, el proyecto fue rechazado por el PDC y el PCN, por razones fundamentalmente formales.

La revista *Newsweek* dio a conocer unas declaraciones de Rubén Zamora en relación a su disposición para retornar a El Salvador y reincorporarse activamente a la lucha política desde las filas del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). Zamora declaró, "nosotros creemos que la firma del acuerdo de Esquipulas II y todo el ambiente que esto ha generado no sólo en El Salvador, sino a nivel regional e internacional, abre nuevas oportunidades y posibilidades a quienes estamos interesados en lograr una paz con justicia y dignidad para nuestro pueblo."

No obstante, la atmósfera empezó a cargarse nuevamente de tensiones en torno al 15 de septiembre, a partir de declaraciones del presidente Duarte sobre la presunta falta de voluntad del FMLN-FDR para reanudar sinceramente el diálogo. El 17, Duarte negó haber recibido ninguna carta de los frentes enviada a través del presidente Arias, desmintiendo declaraciones de Shafick Handal en tal sentido. Por su parte, el Dr. Guillermo Ungo manifestó que, en realidad, Duarte carecía de poder para dialogar, tal como siempre lo había venido señalando el FMLN-FDR. Tan tenso parecía el clima político que el obispo auxiliar de San Salvador declaró, el 18, que el proceso de diálogo "está bloqueado por el momento."

Inopinadamente, el 22 de septiembre en reunión del consejo de ministros e invitados especiales, Duarte informó a la prensa que había recibido del presidente Arias la transcripción en telefax de una carta enviada por el FMLN-FDR al mandatario costarricense, en la cual la insurgencia expresaba su disposición a concertar el cese de hostilidades dentro del espíritu de los acuerdos de Guatemala. Interpretando tal planteamiento como una aceptación expresa de Esquipulas II, tal como él lo había exigido a los frentes, Duarte procedió a anunciar que el 4 de octubre se efectuaría, en la Nunciatura Apostólica de San Salvador, una tercera ronda de diálogo entre su gobierno y el FMLN-FDR.

La respuesta revolucionaria a la propuesta fue inmediatamente afirmativa. El 24, el FMLN-FDR emitió un comunicado oficial de aceptación de la convocatoria, al tiempo que reiteró su propuesta de concertar una tregua durante la semana en que se realizara el encuentro. Para concretar los detalles

prácticos de la cita, monseñor Rivera se reunió en Panamá, el 26, por espacio de 4 horas, con una delegación de los frentes. Tres días después, con el mismo propósito, se reunió en San José una delegación gubernamental, integrada por el Dr. Fidel Chávez Mena y el Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, con los delegados revolucionarios Jorge Villacorta, Eduardo Calles y Salvador Samayoa. La reunión, empero, fue suspendida por los frentes debido a las declaraciones que hizo el presidente Duarte el mismo día en San Salvador, durante los actos del día del paracaidista. En estas declaraciones, Duarte condicionó su participación en el encuentro del 4 de octubre a que los 5 miembros de la comandancia general del FMLN asistieran a la cita, y señaló que el tema fundamental a discutir en el encuentro sería la deposición de las armas por parte del FMLN. Fue sólo la gestión mediadora de monseñor Rivera y la voluntad de diálogo de los frentes lo que impidió que el proceso volviese a naufragar. Se acordó una nueva reunión preparatoria a realizarse en Guatemala el 1 de octubre, para ultimar los dispositivos logísticos y de seguridad del encuentro de alto nivel.

En el ámbito laboral, el suceso más relevante de septiembre lo constituyó la suspensión de la huelga del STISSS, levantada la noche del 3, luego de que el Ministerio de Trabajo advirtiera a los huelguistas que tenían un plazo de 24 horas para retornar a sus labores o de lo contrario disolvería el sindicato. Ese día, tras una maratónica jornada de negociaciones, el STISSS cedió al ultimátum, aunque logró que el Ministerio de Trabajo redujera todas las sanciones a una multa, y que el ISSS se comprometiera a negociar, con la mediación del ministerio, la cláusula 76 del contrato colectivo, relativa al tabulador de salarios. Sin embargo, el proceso judicial incoado por el Dr. Bustamante ante el Juzgado Sexto de lo Penal siguió su curso en lo referente a las acusaciones de "entorpecimiento o abandono de servicios públicos" y "amenaza agravada" contra él mismo de parte de los directivos del STISSS. El juez aceptó una fianza de 5 mil colones por cada uno de los 12 dirigentes sindicales acusados por el delito de "abuso contra el libre ejercicio del derecho a huelga." El STISSS pagó la fianza con un título de propiedad del secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), Dr. Mario Reni Roldán, de lo contrario los dirigentes hubieran sido capturados.

Otros sucesos relevantes dentro del panorama político-laboral fueron la manifestación organizada el 15 de septiembre por la UNTS para exigir el "rescate de la soberanía nacional y el cese a la intervención norteamericana en el país," en la cual participaron unas 3 mil personas; y la "Jornada Nacional de Reforma Agraria," organizada el 26 de septiembre por la confederación de Asociaciones Cooperativas (COACES) y la Unión Nacional Campesina

(UNC), evento al cual asistieron más de 400 delegados de diversas federaciones de cooperativas (FEDECACES, FEDECOOPADES, FENACOA, FECORASAL, FECORACEN, FECORAPCEN y FECORAO), organizaciones campesinas (ANC, ANTA, SITAS, ANIS, ASID), organizaciones sindicales (ASTIRA, FUSS, FESTIAVTSCEs, FENASTRAS, UNTS) y otras entidades como la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas." Por su parte, el 27, la Federación Unitaria Sindical (FUSS) realizó su XXIII Congreso Federal Ordinario, denominado "Por la paz, la justicia y la soberanía nacional, trabajadores en pie de lucha." En una línea más explícita de presión a favor del diálogo, destacó la "Carta abierta a la Comisión Nacional de Reconciliación," enviada el 25 por la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas," la iglesia luterana, el Consejo de Comunidades Marginales (CCM), la Asociación Salvadoreña de Cientistas Sociales, la Asociación Salvadoreña de Sociología, y los partidos PSD, PAR y MERECEN.

La guerra mantuvo su ritmo. En la línea de sabotaje a la infraestructura económica, el FMLN incrementó sus ataques a los cultivos de exportación. El 4, sabotó un beneficio de café en Ateos (La Libertad), y el 14 otro, en Santiago de María (Usulután), así como 2 plantaciones de algodón, una en jurisdicción de Jiquilisco (Usulután) y la otra en Zacatecoluca (La Paz). La infraestructura ferroviaria siguió siendo también un blanco privilegiado de los ataques rebeldes. El 9, unidades guerrilleras destruyeron parcialmente una máquina de FENADESAL en las inmediaciones de Tecoluca (San Vicente), y el 16, otra en la jurisdicción de El Paisnal (San Salvador). El 22, el FMLN dinamitó una máquina más de FENADESAL en San Marcos Lempa (Usulután). El 18, dinamitó 3 torres del sistema primario del tendido eléctrico, una de ellas en la jurisdicción de Villa El Triunfo (Usulután) y las otras dos en el cantón Santa Anita, jurisdicción de Mercedes Umaña, en el mismo departamento, dejando sin energía amplios sectores de la zona oriental. En San Salvador, los comandos urbanos incendiaron, el 10, las oficinas de ANTEL de Soyapango, a escasos metros del puesto de la defensa civil del lugar.

También en el ámbito de las acciones militares de desgaste de la Fuerza Armada el FMLN mantuvo un ritmo relativamente intenso. El 9 de septiembre, Radio Venceremos aseguró que desde el inicio de la operación contrainsurgente "Domingo Monterrosa," el FMLN había causado al ejército, en combates librados en el frente central Modesto Ramírez, un total de 500 bajas entre muertos y heridos, de las cua-

les 173 pertenecían al batallón Belloso, 22 al de paracaidistas y el resto a tropas de la Cuarta Brigada de Infantería y del Destacamento Militar Número Uno. El 16, un convoy de 6 camiones militares fue emboscado en la jurisdicción de Apastepeque (San Vicente), con saldo de 16 bajas castrenses. El mismo día, en las inmediaciones de la finca Suchinango, sobre la carretera entre Nejapa y Quezaltepeque, fue emboscada la policía militar encargada de dar seguridad a las instalaciones de CEL, cuando uno de sus contingentes retornaba de brindar protección a las tareas de reparación del tendido eléctrico en la zona. Como saldo de la emboscada, murieron 13 efectivos y 8 más quedaron heridos. El 21, unidades guerrilleras efectuaron un fuerte ataque a Santa Clara y se libraron intensos combates en San Emidgio, jurisdicción de Guadalupe (San Vicente). Al día siguiente, unidades rebeldes y tropas del Destacamento Militar Número Cuatro y de la Tercera Brigada de Infantería se enfrascaron en un fuerte enfrentamiento en las cercanías de San Gerardo y Jocoaitique (Morazán). El 28, el FMLN atacó el puesto militar de San Pedro Nonualco (La Paz). El 30, un camión militar de la Policía de Hacienda fue emboscado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Quezaltepeque-Nejapa, con un saldo de 5 efectivos heridos. El mismo día, unidades rebeldes emboscaron un camión militar que se dirigía a Suchitoto, resultando 4 efectivos muertos. Por su parte, el COPREFA informó, el mismo 30, de fuertes enfrentamientos en la jurisdicción de Corinto (Morazán).

Frente a este intenso accionar rebelde, la respuesta más relevante de la Fuerza Armada la constituyó la puesta en marcha, el 20 de septiembre, de la Operación Concordia que según explicó el coronel Mauricio Vargas, jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto, implica el despliegue de "40 mil hombres bien armados y preparados por oficiales entrenados en Estados Unidos... y se aplicará con toda su eficacia una nueva táctica de combate, utilizando unidades especiales de penetración que están formadas por 12 hombres equipados con armas livianas de asalto," bajo el esquema general de guerra de guerrilla y la ejecución de acciones sorpresivas en maniobras militares nocturnas. Para apoyar adicionalmente la estrategia de contrainsurgencia, hacia mediados del mes llegó una primera flota de 8 helicópteros UH-1H, de los solicitados por el jefe del estado mayor, general Adolfo Blandón, en su última visita a Washington.

Correlativamente a la profundización de la guerra, se recrudeció la situación de los derechos humanos. El 1 de septiembre, 6 aviones A-37 bombardearon los caseríos de El Aguacate y El Zapote, en la jurisdicción de Santa Marta (Cabañas), provocando la muerte de uno de los repobladores de la localidad, repatriados poco tiempo atrás desde Honduras por gestiones de ACNUR. Otras 7 personas resulta-

ron gravemente heridas y sus casas y pertenencias considerablemente dañadas. Días después, el 15, aviones tipo Fouga bombardearon los cantones San Bartolo Ichanmico y Valle Nuevo (San Vicente) en momentos en que los pobladores festejaban el aniversario de la independencia.

En otra vertiente de las violaciones a los derechos humanos, el 1 de septiembre hombres armados "vestidos de civil" secuestraron al secretario del Comité Coordinador de Trabajadores Universitario (CCTU), Jorge Salvador Ubau, sin que las intensas gestiones de las autoridades de la Universidad Nacional ante el Viceministerio de Seguridad, ni las presiones de diversas personalidades e instituciones internacionales pudieran lograr su libertad. Por otra parte, en circunstancias más oscuras, el 24, fue asesinado José Germán Mira, jefe de división de la oficina central de correos y vocal de la directiva de la Asociación Nacional de Empleados Postales (ANEPES). Del hecho se responsabilizó un autodenominado "Comando Nacional Anticomunista," el cual, en un comunicado amenazó mortalmente a otros funcionarios públicos, y anunció el inicio de "una lucha sin cuartel contra los corruptos de saco y corbata que hacen de los graves problemas del país un negocio lucrativo."

En contraste, la Fiscalía General de la República removió diversos casos célebres de asesinatos en los que habrían estado involucrados importantes mandos militares. El 2 de septiembre el Juez Cuarto de lo Penal reabrió el caso de Monseñor Romero, con la declaración de una testigo que implicó al teniente coronel Mauricio Staben, comandante del batallón Arce, y al teniente Isidro López Sibrían, comprometidos meses atrás en el "caso de los secuestros." Por su parte, la Corte Suprema de Justicia informó que el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María (Chalatenango), había reabierto el caso de los 4 periodistas holandeses asesinados en dicho departamento en 1982. La fiscalía misma reabrió el caso de la masacre de Las Hojas y solicitó la detención provisional del coronel Elmer González Araujo, jefe de la Intendencia de la Fuerza Armada, y del capitán Carlos Alfonso Figueroa, comprometidos en el suceso. La reapertura de este último caso pareció colmar la paciencia de la Fuerza Armada, al punto que el 25 de septiembre, en reunión de comandantes de todo el país, un grupo de éstos habría solicitado la renuncia del Viceministro de Seguridad, coronel Reynaldo López Nuila, por estar favoreciendo la "politización" del caso al apoyar las gestiones de la fiscalía.

También en el seno del PDC, aunque por otros motivos, afloraron tensiones acumuladas de varios meses atrás entre los partidarios de la precandidatura presidencial del Lic. Julio Adolfo Rey Prendes y los simpatizantes del Dr. Fidel Chávez Mena. El 6 de septiembre, durante la convención municipal del

partido en Ilobasco, se suscitó un fuerte intercambio de palabras, que luego devino en golpes, entre Wilfredo Barrera Panameño —simpatizante de Chávez Mena— y el gerente del Proyecto de Desarrollo de Cabañas (PRODECA), Manuel de Jesús López —partidario de Rey Prendes. En el curso de la pelea, uno de los guardaespaldas de López, de nombre Pedro Mejía, con cargo de ordenanza en PRODECA, ultimó de un disparo, por la espalda, a Barrera Panameño. Aunque el secretario general del partido, Rodolfo Castillo Claramount, intentó disminuir la relevancia del incidente, atribuyéndolo a "un fanatismo local que no dimensiona adecuadamente el juego democrático en un partido abierto como el PDC," el suceso puso de manifiesto las enconadas tensiones prevaletentes en las filas del PDC, motivando a su comité político a declararse en sesión permanente y elaborar un instructivo especial para normar las futuras convenciones.

El ámbito regional siguió dominado por los dinamismos de Esquipulas II en favor de la pacificación y por los esfuerzos del gobierno de Reagan para evitarlo. A la gira por el área que el 8 y 9 de septiembre realizó un grupo de empresarios ultrac conservadores y de congresistas republicanos encabezados por el precandidato presidencial Jack Kemp para promocionar la concesión de 310 millones de dólares a los antisandinistas, siguió, el 10, la visita del nuevo embajador itinerante de la Casa Blanca para Centroamérica, Morris Busby, nombrado en sustitución de Philip Habib. En contrapartida, aunque con menor intensidad que en las semanas precedentes, los suscriptores de Esquipulas II prosiguieron las conversaciones para la implementación de los acuerdos. El 17 y 18 de septiembre se reunieron simultáneamente en Managua la Comisión Ejecutiva, integrada por los cancilleres centroamericanos, y la Comisión Internacional de

Verificación y Seguimiento, con el propósito de definir los parámetros para medir los avances o retrocesos habidos en el proceso de pacificación, impulsados a partir de la cumbre de Guatemala. Nicaragua siguió avanzando en la implementación de los acuerdos, muy por delante de los otros países, tal como lo mostró, el 19, al anunciar la reapertura del diario *La Prensa*, acertada tras conversaciones sostenidas entre la propietaria del periódico, Violeta de Chamorro, el presidente Daniel Ortega, el canciller Miguel D'Escoto y el canciller costarricense, Rodrigo Madrigal Nieto.

Los dinamismos antagónicos de Esquipulas II y de la política exterior norteamericana hacia la zona se pusieron aún más de manifiesto con ocasión de las 42ª Asamblea General de las Naciones Unidas, inaugurada el 21 de septiembre. En su discurso de inauguración, el presidente Reagan no tuvo empacho en reiterar que mientras su gobierno considerase que en Nicaragua no existía un proceso democrático, seguiría apoyando a los contrarrevolucionarios. Un día después, en cambio, el presidente Cerzo instó al pleno de la ONU a apoyar efectivamente el plan de paz firmado en Guatemala. El mismo día, en Washington, el presidente Arias solicitó al congreso que suspendiera la ayuda a los contras y diera "una oportunidad a la diplomacia y al diálogo para combatir la guerra con la paz" en Centroamérica. En la misma línea, el 23 de septiembre, al dirigirse a la asamblea general de la ONU, Arias solicitó el apoyo de la comunidad internacional para los acuerdos de Esquipulas II, resaltando que había "enemigos internos y externos opuestos al camino escogido por los centroamericanos," enemigos que quisieran cerrar "la última puerta para que en Centroamérica prevalezca la razón, para que la paz se imponga sobre la guerra."